

Imprimir

Colombia está hoy en el limbo político y jurídico. Una vez más se hizo evidente la esquizofrenia de un pueblo que quiere la paz pero que no logra sobreponerse a una estructura polarizante que fomenta la discriminación y la exclusión, que se apega a verdades absolutas y se niega a reconocer al otro, que antepone intereses mezquinos al interés general. Un país complejo en el que se entrecruzan fuerzas progresivas y fuerzas regresivas en el marco de un Estado frágil que reproduce un esquema de centro periferia; una sociedad acostumbrada a vivir en la incertidumbre, más motivada por los sentimientos que por los argumentos, ansiosa de construir una comunidad política pero relativamente apática frente a los asuntos públicos, amarrada al pasado, apegada a lealtades particulares y grupales. Después de una votación en la que participó un poco más del 37 por ciento del potencial electoral, en la que los partidarios del No ganaron con el 51,2 por ciento de los votos válidos emitidos y los nulos sumaron más de 150 mil, cifra superior a los 53.894 por los que perdió el Sí, el acuerdo firmado por el Gobierno con las FARC en La Habana ha quedado en entredicho.

Explicar las razones que llevan a un hecho después de que ha sido consumado es relativamente fácil. Proyectar sus consecuencias en el futuro lo es menos. Hay acuerdo entre los analistas en considerar que mientras el gobierno nacional concentró sus esfuerzos a debatir con estratos decisores, y a asistir a foros organizados por universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil, asumiendo que la firma de los acuerdos era fácil de vender porque es incomprensible que un pueblo prefiera la guerra y la muerte a la paz y el bienestar, los partidarios del No eligieron otra estrategia: ligar los acuerdos con las FARC a temas polémicos que trasnochaban los estratos más conservadores de la sociedad colombiana y a difundir un sartal de mentiras directamente, por los medios de comunicación y las redes sociales.

El país se fue a dormir en medio del desconcierto por un resultado que contradujo a las encuestas y al entusiasmo manifestado por la comunidad internacional en pleno, pero se encuentra más desorientada hoy cuando el senador Uribe, ganador indiscutido de la jornada electoral del 2 de octubre, propone los mismos temas acordados en La Habana y que él y su

partido criticaron antes: amnistía para los guerrilleros y “alivios” para los militares, a los que agrega asuntos que no vienen al caso como la eliminación de unos impuestos, la “confianza inversionista”, la propiedad que nadie estaba amenazando y la conservación de la familia tradicional.

Del ahogado el sombrero pero....

El proceso de paz y el futuro próximo de los acuerdos nadan en un mar de incertidumbre pero hay atisbos de esperanza. Una inmensa mayoría de los colombianos está por la paz aunque no sepa qué tipo de paz quiere y aunque el meollo del problema es político el asunto no está del todo perdido en el plano jurídico, lo que en un país tan santanderista como el nuestro tiene importancia.

Los plebiscitos suelen ser interpretados como una expresión de apoyo o rechazo al gobierno de turno lo que en un régimen parlamentario conduce directamente a la renuncia del primer ministro y su gabinete. Lo vimos con ocasión del *Brexit* en el Reino Unido. Ciertamente, Uribe logró amarrar el voto por el No a un voto de castigo a un presidente que concita una favorabilidad entre los colombianos apenas superior al 20 por ciento, cuando la suya mantiene cotas superiores al 60 por ciento. Indiscutiblemente, el triunfo del No ha dejado muy debilitado al gobierno de Santos quien le apostó todo su capital político a la paz, pero el régimen colombiano es presidencialista y el primer mandatario seguirá al mando de los destinos de la nación en los casi dos años de gobierno que le quedan, así sea con escasa capacidad de gobernabilidad y negociación.

Artículo completo 